

Circunstancia. Año VII - Nº 19 - Mayo 2009

Sumario

(Para navegar por la Revista, utilice el **MENÚ DE LA IZQUIERDA**)

SUMARIO

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 70 AÑOS DESPUÉS: PANORAMA MULTIDISCIPLINAR

Presentación

Antonio López Vega
Coordinador del número y Director de *Circunstancia*

Artículos

La "Guerra Civil" de Miguel de Unamuno.
Paul Aubert

Miradas Opuestas: La Casa Blanca y la opinión pública norteamericana ante la Guerra Civil Española.
Soledad Fox Maura

El exilio de 1936 y la *tercera* España. Ortega y Gasset y los *blancos* de París, entre franquismo y liberalismo.
Eve Giustiniani

De la Gran Guerra a la Guerra Civil: el nacimiento de la movilización industrial.
Elena San Román

El Picasso más político: el Guernica y su oposición al franquismo.
Genoveva Tusell García

Miscelánea

Crisis de la Modernidad. El escenario del siglo XX.
José Lasaga Medina

Gregorio Marañón y el nacimiento de la endocrinología en España: Ejemplo ilustrativo del impulso científico del primer tercio del siglo XX español.
Antonio López Vega

Reseñas y noticias bibliográficas

El estante vacío. Literatura y política en Cuba. Rafael Rojas.
Andrea Donofrio

La democracia en treinta lecciones. Giovanni Sartori
José Lasaga

Historia de Europa en el siglo XX. A través de grandes biografías, novelas y películas (1914-1989). Onésimo Díaz Hernández.
Manuel Martínez Neira

From Colony to Superpower. U. S. Foreign Relations Since 1776. Herring, George C.
José Antonio Montero Jiménez

Imprimir

Circunstancia. Año VII - N° 19 - Mayo 2009

Presentación

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 70 AÑOS DESPUÉS: PANORAMA MULTIDISCIPLINAR

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset me confía la tarea de dirigir en los próximos tiempos la revista electrónica de ciencias sociales ***Circunstancia***. Mi maestro y amigo, Juan Pablo Fusi, que ha dirigido la revista hasta ahora — junto a José Juan Toharia en los últimos tiempos —, ha logrado en los primeros seis años de andadura de la misma, que *Circunstancia* tenga un espacio propio en el panorama académico español. Asumo ahora esta responsabilidad, con el objetivo fundamental de consolidar esa presencia perseverando en los criterios fundacionales de la revista, el rigor científico y la precisión conceptual. Respondiendo a su vocación, la revista tendrá la mirada puesta en el ámbito multidisciplinar prestando atención a distintos enfoques académicos, siempre desde la mayor exigencia y garantía científica.

En este número 19, la revista *Circunstancia* se asoma a la Guerra Civil española al cumplirse 70 años de su finalización. Es lugar común de todas las historias de la contienda española explicar la imposibilidad de recoger ni siquiera una densa selección de la inmensa bibliografía publicada en todo el mundo sobre la cuestión. Con todo, el tema no se ha agotado y los investigadores siguen alumbrando el conocimiento de la misma con investigaciones y enfoques originales, lo que es buena muestra del interés que continúa suscitando su estudio.

En el monográfico de este número se recogen artículos complementarios que abarcan cuestiones desde diferentes perspectivas. Así se podrán encontrar investigaciones sobre intelectuales (Aubert y Giustiniani), la perspectiva internacional de la guerra desde la opinión pública norteamericana (Fox Maura), la economía (San Román) o el arte (Tusell García). En el apartado miscelánea se recoge un artículo sobre la crisis de la modernidad (Lasaga) y otro sobre la historia de la endocrinología en España (López Vega).

Antonio López Vega

Coordinador del número y Director de *Circunstancia*.

Imprimir

Circunstancia. Año VII - Nº 19 - Mayo 2009

Artículos

Para consultar un artículo, selecciónalo en el **menú de la derecha**.

- *La "Guerra Civil" de Miguel de Unamuno.* Paul Aubert
- *Miradas Opuestas: La Casa Blanca y la opinión pública norteamericana ante la Guerra Civil Española.* Soledad Fox Maura
- *El exilio de 1936 y la tercera España. Ortega y Gasset y los blancos de París, entre franquismo y liberalismo.* Eve Giustiniani
- *De la Gran Guerra a la Guerra Civil: el nacimiento de la movilización industrial.* Elena San Román
- *El Picasso más político: el Guernica y su oposición al franquismo.* Genoveva Tusell García

Imprimir

Circunstancia. Año VII - N° 19 - Mayo 2009

Artículos

DE LA GRAN GUERRA A LA GUERRA CIVIL: EL NACIMIENTO DE LA MOVILIZACIÓN INDUSTRIAL^[1]

Elena San Román

[Resumen-Palabras clave](#) / [Abstract-Keywords](#)

Introducción

1. Gran Guerra y movilización industrial

2. Movilización industrial y guerra civil

a. La industria en la España republicana

b. La industria en la España de Franco

3. Empresas en uno y otro bando

a. Hidroeléctrica española: una empresa sin empresarios

b. Saltos del Duero: la consolidación de su mercado natural

Conclusiones

Introducción:

La guerra civil fue para España la primera guerra industrial del siglo XX: el primer conflicto que movilizó todos los recursos económicos e industriales del país. La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial evitó que hubiera experiencias anteriores, como los ensayos de movilización económica e industrial que protagonizaron los contendientes europeos entre 1914 y 1918. Sin embargo, los militares españoles habían tomado buena nota de lo sucedido en Europa y habían realizado en los años de entreguerras los primeros estudios sobre la forma de transformar la economía y la industria al servicio de la guerra. La ocasión de poner en práctica estos trabajos teóricos llegó en 1936.

Estas páginas analizan cómo se organizó la actividad industrial durante la guerra civil en España y la influencia que, sobre este proceso, tuvieron los trabajos de movilización económica e industrial desarrollados a raíz de la Gran Guerra. En el primer apartado se repasa lo que supuso la movilización de 1914 y la huella que dejó en España. El segundo apartado estudia la organización industrial tanto en la España republicana como en la España de Franco. Servirá para poner de manifiesto la distinta intensidad con que se siguieron, en uno y otro bando, las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial y las repercusiones que tuvo la movilización sobre el desarrollo industrial del estado franquista una vez terminado el conflicto. El tercer apartado recoge la experiencia concreta de dos empresas del sector eléctrico situadas, cada una, en una de las dos Españas: la distinta manera de llevar a cabo la movilización tuvo consecuencias también diversas que fueron más allá de la propia guerra.

1. Gran Guerra y movilización industrial

La Primera Guerra Mundial implicó una importante transformación en el concepto de la guerra. Hasta entonces, los factores fundamentales de las guerras europeas se habían reducido a tres: la instrucción del soldado, la planificación de la estrategia y el armamento. En tiempos de paz se fabricaba el material de guerra necesario para cubrir las necesidades de los contendientes. Cuando estallaba un conflicto, las industrias especializadas en la fabricación de armamento eran las encargadas de reemplazar el material perdido o desgastado así como las municiones correspondientes. De este modo, cada país facilitaba a sus tropas los pertrechos necesarios sin necesidad de trastocar su economía. Los enfrentamientos se reducían a una cuestión puramente militar que no movilizaba los recursos de una nación y que sólo afectaba a las zonas donde se desarrollaban los enfrentamientos.

Sin embargo, la Gran Guerra acabó con esta situación. El plan alemán, trazado por el jefe del Estado Mayor, conde Schlieffen, suponía la conquista rápida de Francia a través de Bélgica: una guerra corta de cinco o seis semanas a lo sumo. Lejos de cumplirse estas predicciones, los frentes se estabilizaron y comenzó una guerra de trincheras de naturaleza desconocida^[2]. Las fábricas de armamento tradicionales ya no eran capaces de abastecer las enormes necesidades de los ejércitos movilizados. Por primera vez aparecían en el campo de batalla camiones y aeroplanos, gases tóxicos y otras armas químicas. Era la aplicación de la segunda oleada industrializadora a la guerra. Desde fines del siglo XIX el motor de combustión interna, la electricidad y las numerosas aplicaciones de la moderna química habían transformado el panorama fabril de un modo similar a como lo había hecho dos siglos atrás la hulla. Ahora estas innovaciones transformaban también las guerras.

Como inmediata consecuencia de la nueva situación nació entre los contendientes, y desde ellos se

extendió a los neutrales, el concepto de movilización nacional para definir la utilización integral de los recursos de un país al servicio de la guerra[3]. El aspecto más importante de esa movilización general, era el de la industria; movilizar la industria equivalía a orientarla por entero a la construcción de material bélico. Esto significaba que, en las guerras del siglo XX, a los tres factores tradicionales se unía uno nuevo, el industrial, la capacidad de producir lo necesario para la guerra.

Durante la Gran Guerra, todos los países beligerantes siguieron, en lo referente a la organización de la economía, unas pautas comunes. Como indicó Marwick, en los primeros meses de la guerra cada uno de los contendientes vivió su particular crisis de municiones: un fuerte desajuste entre el brusco incremento de la demanda y la inelástica oferta de armamentos. La reacción fue también común: acabar con el libre mercado y abrir las puertas a la intervención estatal[4]. Desde el punto de vista industrial se intensificó la intervención del Estado sobre la producción y se crearon organismos, en algunos casos Ministerios, para llevar a cabo las tareas de coordinación, control de la producción y de los precios y elaboración de estadísticas.

La falta de experiencia hizo de aquella primera movilización industrial un cúmulo de errores marcados por la improvisación, pero también permitió extraer un conjunto de provechosas enseñanzas. La movilización industrial se convirtió en tema central durante los años de posguerra: *si vis pacem para bellum*[5]. Todas las naciones dirigieron sus esfuerzos a evitar que se repitiera el caos industrial de 1914. La movilización industrial nació en la Gran Guerra pero su importancia creció en los años siguientes favorecida por el ambiente bélico que caracterizó a la Europa de la Paz Armada. Aunque en muchos países desaparecieron los mecanismos de control creados para el conflicto, todos apostaron por la creación de organismos permanentes que se encargaran de la organización industrial de las futuras guerras. En términos generales, sus principales tareas consistieron en el estudio de la capacidad industrial de sus territorios, de sus posibilidades de transformación en caso de conflicto y en la obtención de productos esenciales como por ejemplo combustibles sintéticos.

Aunque España no participó en la Gran Guerra, la movilización industrial europea despertó gran interés entre los militares españoles. En España no se produjo intervención alguna de la industria por parte del Estado pero se crearon, en el seno del Ejército, unas Comisiones de Movilización Industrial cuyo objetivo era alcanzar un conocimiento detallado de la situación de la industria española y de sus posibilidades de participación en un conflicto. Estas comisiones emprendieron tareas de estadística industrial y estudios particulares de los sectores relacionados con la provisión de armamentos y la sustitución de importaciones en tiempos de guerra o con las principales regiones industriales de España. En el Archivo General Militar de Segovia se conservan muchos de estos trabajos: investigaciones sobre el estado de la industria química, aeronáutica y automovilista; recopilación de datos sobre sectores estratégicos o, simplemente sobre la capacidad fabril de la mayoría de las regiones españolas[6].

El trabajo de las Comisiones de Movilización industrial se extendió durante la posguerra y continuó hasta el inicio de la guerra civil española. Es cierto que, en el caso español, las tareas de movilización industrial se restringieron a un terreno puramente teórico puesto que se redujeron al estudio de la capacidad industrial del país. Apenas se hicieron planes concretos de movilización general ni se indicaron los modos de llevar a cabo una movilización industrial en caso de conflicto. Sin embargo, en el seno del ejército se generalizaron y difundieron ciertos principios y opiniones de gran trascendencia en la guerra civil y en la inmediata posguerra. En concreto quisiera destacar dos: la defensa de una mayor intervención del Estado en la industria a través del Ejército, y un fuerte afán por nacionalizar los principales sectores fabriles.

Respecto al intervencionismo, se extendió entre los militares la idea de que el Estado, a través del ejército, debía tener mayor protagonismo en el desarrollo de la industria, y no sólo en tiempo de guerra. Estaba fuera de toda duda que, en caso de conflicto, el control del ejército debía ser amplio e intenso. Pero además muchos militares defendieron que en tiempos de paz también el Estado, a través del ejército, debía intervenir o al menos controlar los sectores considerados estratégicos. Esta defensa de un mayor intervencionismo tuvo sus matices: hubo, en el ejército, defensores de la creación de una industria exclusivamente estatal y otros que abogaron por la colaboración entre industrias particulares y públicas. En efecto, algunos militares opinaron que la labor del gobierno debía encaminarse a la protección de la industria estatal de material de guerra, aunque esto tuviese consecuencias perjudiciales sobre la industria privada, creada o posible[7]. Hubo, sin embargo, otras voces que defendieron la necesidad de una industria mixta pero, en todo caso, apoyaron la labor de vigilancia del Estado a la producción nacional, considerando que sería erróneo permanecer al margen de una cuestión tan importante[8].

En cuanto al afán nacionalizador, la movilización industrial intensificó y amplió el grupo de los defensores de un nacionalismo económico a ultranza. La nacionalización suponía una política de sustitución de importaciones que no debía reparar en gastos. Se inició con ello una racionalidad económica, basada en la defensa nacional, que no contemplaba la existencia del coste de oportunidad tal como lo definieron los economistas clásicos[9]. No se puede calificar de irracional este tipo de criterio: simplemente abrió una senda, continuada en la posguerra civil española, y caracterizada por el sometimiento de la economía a los fines políticos. Es cierto que no todos los militares españoles abogaron por la nacionalización: el gasto adicional que suponía la renuncia al armamento y aparatos de guerra extranjeros, no sólo más baratos sino de mejor calidad, levantó fuertes oposiciones entre algunos militares. Sin embargo, es innegable que la defensa de la nacionalización fue una característica distintiva de las comisiones de movilización, tanto por la tenacidad como por la intensidad con que presentaron esta cuestión.

Ni el intervencionismo industrial ni el nacionalismo económico eran una novedad en la España del primero tercio del siglo XX. Sin embargo, la movilización industrial reforzó significativamente los argumentos de sus partidarios, especialmente los de algunos de los militares que regirían el futuro de España al terminar la guerra civil.

2. Movilización industrial y guerra civil

La influencia de la movilización industrial, y en concreto, de todos los trabajos realizados por las Comisiones

de Movilización Industrial en los años veinte, no pudo ser más distinta en las dos Españas que produjo el alzamiento de julio de 1936. Como cabía esperar, en la España centralizada y militarizada de Franco se siguieron las directrices marcadas por las Comisiones de Movilización Industrial y se hicieron sentir la mayoría de los principios que se habían difundido en la prensa militar de los años de entreguerras. En la España republicana, descentralizada y envuelta en una revolución social, no se percibe rastro alguno de una movilización industrial tal como se había comprendido en el ejército español tras la Gran Guerra.

a. La industria en la España republicana

Todos los historiadores que han estudiado el comportamiento económico e industrial de la España republicana durante la guerra civil coinciden en que la debilidad institucional fue clave en la derrota de la República^[10]. Algunos trabajos recientes pretenden disminuir la importancia de este factor y señalan que la falta de materias primas y el progresivo estrangulamiento del mercado que padeció la España leal a la República fueron las causas centrales del mal comportamiento de su industria^[11]. Es cierto que escasearon las materias primas y que el mercado disminuyó su tamaño a medida que las tropas de Franco avanzaron, pero también la España franquista partió en desventaja con respecto a las materias primas y tuvo que sobrevivir en los compases iniciales de la guerra con un mercado más rural y de menor poder adquisitivo. Y logró superar ambos obstáculos. Es indudable que el fracaso industrial de la República se debió a un conjunto de causas entre las que se encuentran las citadas y otras como la diferente intensidad y cuantía de la ayuda exterior. Sin embargo, los factores institucionales continúan siendo, hoy por hoy, esenciales para comprender lo sucedido.

Descentralización y caos definen a partes iguales la progresiva situación de la España republicana. Como señaló Thomas y ha recordado recientemente con acierto Sánchez Asaín, "la España republicana constituía, más que un sólo Estado, una aglomeración de Repúblicas independientes"^[12]. Durante buena parte de la guerra coexistieron gobiernos regionales e infinidad de poderes locales cuyas fricciones con el gobierno central se convirtieron en una constante. Cataluña y el País Vasco tuvieron sus propios gobiernos autónomos regidos por sus Estatutos. Otros territorios fueron controlados por instituciones de menor entidad jurídica pero que de hecho actuaron con enorme autonomía.

Seguendo el reciente estudio de Jordi Catalán, que reúne y sintetiza cuanto se ha investigado sobre el tema, pueden distinguirse cinco etapas en la trayectoria industrial de la República. La primera, de julio a setiembre de 1936, caracterizada por la revolución social y la crisis industrial. La huelga inicial promovida en la mayoría del territorio republicano paró muchas de las fábricas en un momento crítico. La vuelta al trabajo fue acompañada por la implantación del control obrero en la gran mayoría de ellas. En Cataluña, por ejemplo, convivieron cuatro tipos de intervención de las empresas: (i) algunas fueron simplemente controladas por comités obreros locales. (ii) Otras fueron regidas por el Comité Central de Milicias Antifascistas, un organismo con competencias en materia de orden público creado en julio de 1936 por la Generalitat. (iii) En aquel mismo mes las autoridades de la Generalitat erigieron una Consejería de Defensa que instituyó, a su vez, una Comisión de Industrias de Guerra para organizar la fabricación de material bélico. La Comisión se organizó en tres grandes secciones, metal química y aviación, y en setiembre controlaba ya unas veinticuatro fábricas. (iv) Por último, algunos sectores industriales como las empresas ópticas o los trabajadores de la piel o del vidrio se inclinaron por la colectivización de todas sus fábricas. Esta diversidad de modelos de control se repitió en otros enclaves industriales leales a la República como Valencia, Alcoy, Elda o Guipúzcoa. En todos ellos, al igual que en Cataluña, los controles obreros y los organismos locales creados para la dirigir las fábricas se enfrentaron a las autoridades centrales que veían, con impotencia, su incapacidad para concentrar la organización de la industria en tiempo de guerra. Vizcaya fue la única región industrial destacada de la zona republicana que se mantuvo bajo una única dirección política, evitó los procesos de control obrero y mantuvo la propiedad privada de las empresas. También en Madrid el control obrero tuvo menos competencias y se respetó la antigua estructura jurídica de muchas sociedades.

La segunda etapa que destaca en su trabajo Jordi Catalán abarca desde setiembre de 1936 hasta el final de aquel año. Frente a la diversidad de formas de organización industrial surgidas en los compases iniciales del conflicto se impuso la colectivización en Cataluña y en Valencia. En Cataluña el decreto de colectivización, que afectaba a todas las sociedades con más de cien trabajadores, fue aprobado por la Generalitat en el mes de octubre de 1936. Suponía el traspaso de la responsabilidad de estas empresas a sus obreros. Entre ellos se elegiría un Consejo que actuaría como Consejo de Administración y del que formaría parte un interventor, nombrado por la Generalitat. Las sociedades de menor tamaño, que no entraban en el proceso de colectivización, preservarían la propiedad privada pero serían controladas por un comité obrero. El decreto de colectivización valenciano, aprobado en diciembre de 1936, era todavía más radical que el catalán puesto que afectaba a todas las empresas con más de cincuenta trabajadores. Una vez más, el País Vasco se convirtió en una excepción al marco general. En octubre fue aprobado el Estatuto de Autonomía y el nuevo gobierno logró asegurar el funcionamiento normal de la justicia y evitar las huelgas. Se intervino la industria pero no se produjeron expropiaciones y se respetó en todo momento la propiedad privada.

La tercera etapa abarca hasta agosto de 1937 e incluye la caída del enclave industrial de Bilbao. Esta etapa se caracteriza por las numerosas fracturas que resquebrajaron de forma definitiva la supervivencia de la República: por una parte el enfrentamiento entre el PSOE, que gobernaba desde noviembre de 1936 con apoyo de los anarquistas, y el PCE en claro ascenso y que entró finalmente en el gobierno desplazando a los anarquistas en mayo de 1937. Por otro lado, las malas relaciones del gobierno central con los gobiernos autonómicos vasco y catalán. Este panorama de divisiones afectó inevitablemente a la organización de la industria de guerra. Los comunistas abogaban por un proceso de nacionalización de industrias frente a las colectivizaciones. La nacionalización supondría la dirección de las industrias bélicas y de la minería por parte del Estado. Era una propuesta claramente centralizadora. Sin embargo el decreto sobre organización industrial, promulgado el 23 de febrero de 1937 no recogió en su totalidad este deseo de centralización y se limitó a establecer el derecho del Estado a intervenir e incautar industrias. Nacieron así como figuras jurídicas la empresa intervenida y la empresa incautada. En el primer caso, la dirección y responsabilidad económica continuaban a cargo del empresario y el Estado se reservaba la fiscalización de su actividad a través de un Delegado

Interventor. En el segundo caso, la responsabilidad económica pasaba a manos de los órganos de gestión representantes del Estado. Tanto la intervención como la incautación podían ser parciales, si afectaban sólo a determinadas materias o productos, o totales, que afectaban a la empresa como tal. La legislación establecía además la creación de un Comité de Control Obrero constituido de forma paritaria por obreros y empleados de la propia industria pertenecientes a las centrales sindicales U.G.T. y C.N.T. En el caso de las empresas intervenidas, la función del comité de control se limitaría a la inspección de la actividad industrial y la formulación de sugerencias de mejora. En las empresas incautadas, el Comité de Control asumía todas las actividades propias del Consejo de Administración de una sociedad anónima, bajo la dirección del Delegado Interventor.

En mayo de 1937 un nuevo cambio y reestructuración del gobierno acabó con la cartera de Industria y traspasó las competencias en materia industrial al recién nacido Ministerio de Defensa cuya cartera recayó sobre Indalecio Prieto. El cambio en la presidencia de gobierno, de Francisco Largo Caballero a Juan Negrín, la salida de los anarquistas y la presencia de los comunistas significaba, entre otras cosas, el deseo de aparcarse momentáneamente la revolución social para concentrarse en el esfuerzo de ganar la guerra. En palabras de Catalán, suponía el inicio de la fase de centralización de la política industrial en manos del gobierno de la república. La política industrial de Negrín y Prieto se dirigió a poner bajo el control directo de la República todas las actividades fabriles inmediatamente relacionadas con la guerra. Para ello se promulgó en junio de 1937 un decreto de nacionalización de industrias de guerra y se ordenaron requisas e incautaciones de diversas fábricas que hasta entonces habían estado en manos de poderes locales.

Con este viraje de la política industrial se inició, en agosto de 1937, la que Jordi Catalán considera cuarta etapa de la guerra y que se extendió hasta diciembre de 1938. Fue este el único momento del conflicto en el que las autoridades de la República trataron de poner en marcha una movilización industrial en sentido estricto del término. Y fue este el único momento en que pueden atisbarse las indicaciones y postulados que sobre el tema habían inundado las revistas y manuales del Ejército en los años de entreguerras. Por primera vez se otorgó a las autoridades militares un cierto protagonismo en el control de la industria de guerra, se les permitió realizar cuantas requisas precisaran y se estableció la obligación de hacer inventarios industriales. Se organizó, en definitiva, una movilización industrial "ortodoxa", dirigida por el ejército. Esta tarea de centralización se amplió meses más tarde con un decreto de intervenciones especiales, promulgado en octubre de 1937 que ampliaba las posibilidades de requisas establecidas en el verano de 1937. Todo este esfuerzo llegó, sin embargo, demasiado tarde. En el verano de 1937 la República perdió Vizcaya, Santander y Oviedo, tres enclaves industriales sin los que resultaba prácticamente imposible alcanzar la victoria. A partir de ese punto, los últimos meses de conflicto, que Catalán engloba en una quinta etapa, representaron la resistencia y hundimiento final de la República. Aunque Cataluña plantó cara desde el punto de vista industrial y trató de continuar la producción de material de guerra su esfuerzo resultó a todas luces insuficiente e imposible. Una guerra del siglo XX, industrial, no podía vencerse sin una mínima retaguardia industrial con la que no contaba la República desde la caída del norte.

b. La industria en la España de Franco^[13]

Frente al panorama descrito para la España Republicana, la España de Franco llevó a cabo un programa de movilización industrial centralizado y militarizado. Junto a los organismos militares que dirigían la actividad industrial se crearon otros en los que participaron civiles y cuyas tareas se restringían a la elaboración de estadísticas industriales o al estudio de sectores estratégicos. Este esquema de dirección militar y colaboración civil respondía a lo diseñado en los esquemas y planes de movilización trazados en los tiempos de entreguerras dentro y fuera de España. En la mayoría de ellos, se había separado las industrias propiamente bélicas de las "movilizables", es decir, de las que debían adaptarse a la producción militar por las circunstancias. Las primeras quedaron siempre bajo jurisdicción militar, mientras las segundas fueron confiadas a diversos organismos creados a tal efecto.

En el bando de los sublevados, y siguiendo a Bricall, pueden distinguirse dos etapas desde el punto de vista de la organización de la industria separadas por la toma de Bilbao^[14]. Antes del verano de 1937 la insignificancia industrial de la España de Franco hizo que bastara un mínimo marco institucional para organizar la movilización. Toda la industria quedó centralizada a través de las Jefaturas de Fabricación del Ejército y las Jefaturas de Servicios Técnicos de la industria Naval, ambos organismos militares. En agosto de 1936 se crearon unas Comisiones Provinciales de Clasificación, de carácter regional, presididas por los gobernadores civiles, y encargadas de elaborar las estadísticas industriales previas e imprescindibles para cualquier posible movilización de fábricas^[15]. Pocos días después, en el mismo mes de agosto, se creó una Comisión de Industria y Comercio, que dependía directamente de la Junta de Defensa Nacional, principal órgano de gobierno de la España de Franco. La Comisión también estaba formada por civiles y su objetivo era, igualmente, realizar estadísticas que garantizaran el suministro al Ejército^[16]. Entre sus tareas se contaba el estudio de todo lo referente al comercio exterior, exportaciones e importaciones necesarias en tiempos de guerra, y la contabilización de los stocks mineros para ponerlos al servicio del ejército. En octubre de 1936, cuando se creó la Junta Técnica del Estado para sustituir a la Junta de Defensa Nacional como máximo órgano administrativo del nuevo Estado franquista, la Comisión de Industria y Comercio pasó a llamarse Comisión de Industria, Comercio y Abastos^[17]. Sus funciones continuaron siendo las mismas que se le habían asignado a su predecesora: estudio estadístico de las actividades, mercancías y provisiones existentes en las provincias ocupadas, coordinación entre las industrias y posibles auxilios en caso de necesitarlos y fomento de las exportaciones y determinación de las importaciones.

En el verano de 1937, la caída de Vizcaya amplió la organización industrial mediante la creación de unas Comisiones Militares de Incorporación y Movilización Industrial^[18]. Eran organismos de carácter militar que se hacían cargo de las industrias en las zonas que se iban conquistando. Su objetivo era lograr su incorporación a la vida industrial de la España de Franco en el menor tiempo posible. Una vez que se habían solucionado los posibles problemas de las fábricas y que se había asegurado su vuelta a la normalidad, las industrias recuperadas, si estaban directamente relacionadas con la guerra, pasaban a depender de las Jefaturas de Fabricación del Ejército. Cada una de las Comisiones de Incorporación estaba dividida en dos secciones: una para dirigir las industrias directamente relacionadas con la guerra y otra que se encargaba del resto de las industrias y que actuaba como enlace con la Comisión de Industria, Comercio y Abastos de la Junta Técnica del Estado,

organismo que continuaría con el estudio y control de este tipo de empresas. En concreto se crearon tres Comisiones Militares de Incorporación: las de Vizcaya, Santander y Asturias.

En enero de 1938 Franco sustituyó la Junta Técnica del Estado por su primer Consejo de Ministros. La cartera de Industria y Comercio pasó a manos de Juan Antonio Suanzes, marino e ingeniero de la Armada. Suanzes estuvo al frente del Ministerio hasta el verano de 1939 y retomó esta cartera entre 1945 y 1951. Fue además fundador y primer presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), el holding industrial del Estado creado en 1941 y que dirigió hasta 1963[19]. Suanzes disolvió las Comisiones Militares de Incorporación y Movilización Industrial y, siguiendo el esquema de trabajo que habían tenido, separó las industrias de guerra de las civiles[20]. Las primeras, tanto las fábricas del Estado regidas por personal militar y dedicadas a la fabricación de material de guerra como las fábricas civiles incautadas por el Estado y dirigidas por militares, continuaron adscritas al Ministerio de Defensa. Las antiguas Jefaturas Militares de Fabricación pasaron a llamarse Jefaturas Regionales de Movilización y asumieron las tareas de movilización que antes desempeñaban las Comisiones Militares de Incorporación y Movilización Industrial.

Todas las demás industrias no militares fueron encomendadas al Ministerio de Industria y Comercio que creó para su dirección unas Comisiones de Incorporación Industrial y Mercantil[21]. Las primeras regiones en las que se crearon estas Comisiones fueron precisamente aquellas donde desaparecían las Comisiones Militares, es decir, Asturias, Vizcaya y Santander. En el preámbulo del Decreto de creación de las nuevas Comisiones, el ministro de Industria y Comercio advertía que sus predecesoras se habían limitado a organizar la industria de una economía de guerra, pero las nuevas se encargarían de planificar la economía de la paz[22]. El esquema de organización de la producción industrial se completó, en primer lugar, con la creación de las unas Comisiones Reguladoras de la Producción, organismos provisionales predecesores de los futuros sindicatos con amplias atribuciones sobre la regulación de la producción[23]. Además, el Ministerio impuso unas rígidas normas, en agosto de 1938, que regulaban el establecimiento de nuevas industrias o la ampliación de las existentes[24]. En el preámbulo de este decreto se advertía ya que el nuevo Estado tendría que "disciplinar la producción, supeditando la iniciativa privada a las consideraciones del superior interés nacional". Era un anuncio expreso del tipo de política industrial, de marcado carácter intervencionista, que se impondría en la posguerra y cuyo mejor exponente lo constituye el Instituto Nacional de Industria.

El INI, dirigido por quien había redactado toda la legislación industrial del bando franquista durante la guerra civil, Juan Antonio Suanzes, se convirtió en una pieza fundamental de la estructura económica de la autarquía y en uno de los pilares básicos de la estrategia industrializadora de la dictadura de Franco. Bajo la presidencia de Suanzes, el INI puso en marcha muchas industrias de las indispensables en caso de guerra. Desde el INI se hicieron realidad buena parte de las aspiraciones que habían defendido los militares españoles responsables de la movilización industrial en los años de entreguerras. Basta contemplar en el cuadro 1 la relación de actividades que planeaba el INI en sus primeros meses de andadura para darse cuenta de la fuerte influencia que la experiencia movilizador ejerció sobre la nueva institución: de los cinco grupos industriales que debían ser objeto de la actuación del INI, el último estaba dedicado por completo a las industrias "específicamente militares" y acaparaba casi un tercio de las actividades a emprender, diez de treinta y dos. Otros sectores no encuadrados en el grupo V tenían también un marcado tono militar: tal es el caso de la fabricación de pólvoras y explosivos de guerra, o de la producción sintética de hidrocarburos. Si en la España de la República apenas había existido una movilización industrial planificada, en la España de Franco no sólo se había desarrollado toda la teoría de los años de entreguerras: la movilización dejó una huella mucho más profunda al convertirse en la "música de fondo" que inspiró al organismo industrial por antonomasia del nuevo Estado.

Cuadro 1: Plan de actividades del INI. Sectores en los que el Instituto debe actuar. (1942)

Grupo I: Industrias de producciones básicas
Empresa Nacional de Investigaciones Mineras
Combustibles sólidos
Hierro y acero
Cobre y metales no férricos
Aluminio y aleaciones ligeras
Grupo II: Producciones especiales
Combustibles líquidos y lubricantes (rocas bituminosas)
Combustibles líquidos y lubricantes (carbones)
Refinerías
Nitrogenados y fertilizantes
Químicas

Pólvoras y explosivos de guerra
Celulosa
Fibras artificiales
Caucho
Grupo III: Empresas (no militares) de carácter nacional fundamental
Energía eléctrica
Marina mercante
Adquisiciones y suministros
Grupo IV: Industrias de Transformación (de carácter no específicamente militar)
Máquinas herramientas
Motores (excluidos automóvil y aviación e incluidos carros de combate)
Transporte automóvil
Material eléctrico
Transformación
Grupo V: Industrias de transformación, de aplicación característicamente militar
Corazas y elementos pesados
Construcciones navales militares
Aeronáuticas
Material de Artillería
Carros de combate
Aparatos e instalaciones de tiro
Aparatos militares de precisión
Aparatos de comunicaciones militares
Torpedos automóbiles
Otras no incluidas antes
Grupo VI: Varios
Comunicaciones

Fuente: INI, Memoria 1941 y 1942, Anexos, t. I

3. Empresas en uno y otro bando^[25]

La guerra civil española afectó de modo muy diferente a las empresas que operaron en uno y otro bando. La movilización industrial planificada de la España de Franco benefició a las sociedades allí situadas mientras que el desorden industrial de la República perjudicó las actividades de sus empresas, incluso cuando sus dueños

apoyaron a los sublevados. El sector eléctrico ofrece un excelente ejemplo de la distinta suerte que corrieron unas y otras sociedades a través de dos de sus empresas más importantes, Saltos del Duero e Hidroeléctrica Española. Resulta una muestra especialmente interesante porque ambas eran empresas privadas, no dedicadas específicamente al material de guerra, aunque integradas en un sector estratégico.

Hidroeléctrica Española se había creado en 1907 para construir un salto en el río Júcar que produjera electricidad con la que abastecer a Madrid y Valencia[26]. Por su parte, Saltos del Duero se había fundado en 1918 para hacer realidad un ambicioso proyecto de aprovechamiento integral del río Duero. A las puertas de la guerra civil Hidroeléctrica Española aportaba un 14 por ciento de la energía eléctrica que se producía en España. Contaba con tres grandes saltos en el río Júcar - Molinar, Cortes de Pallás y Millares - y uno en el río Cabriel, el de Villora. Su mercado se concentraba en dos zonas geográficas: el sureste español y la zona centro. Saltos del Duero era el principal productor de electricidad del país con su salto en el río Esla, provincia de Zamora, y sus proyectos en curso. Por un acuerdo firmado en 1934, distribuía parte de su electricidad al resto de las empresas eléctricas del país y, contaba además con un mercado propio en Castilla, León y Extremadura. Sin embargo en este mercado todavía no había logrado consolidar su monopolio y en varias de sus provincias seguían operando pequeñas empresas que le dificultaban sus actividades.

Durante la guerra civil, Saltos del Duero mantuvo sus activos y su Consejo de Administración en la España de Franco. Hidroeléctrica Española quedó dividida: sus activos permanecieron en la España leal a la República y su Consejo de Administración, así como la mayoría de sus directivos, estaban o se incorporaron a la España de Franco. Mientras duró el conflicto, la empresa fue gestionada por un Consejo de Administración intervenido por el gobierno central.

Desde el exclusivo punto de vista del negocio, la guerra fue para Saltos del Duero una ocasión única de completar su hegemonía en su mercado natural. De este modo, la Sociedad logró en aquellos años que se incorporaran a su órbita las provincias de Soria, León y Zamora, y la parte de Burgos que hasta entonces había permanecido ajena a su influencia. Las oportunidades que la guerra brindó a Duero no son comparables a la situación de supervivencia que padeció Hidroeléctrica Española, empresa que sufrió la desaparición de notables miembros de su Consejo de Administración como su Presidente, Fernando de Ybarra, asesinado en 1936, y otros importantes consejeros. El Consejo de Administración de Hidroeléctrica Española pasó la guerra sin tener apenas noticias sobre la situación de sus instalaciones. Al tener la sede social en Madrid, Hidroeléctrica Española pudo eludir los procesos de colectivización que afectaron a otras provincias como Cataluña y Valencia, aunque no sucedió lo mismo con algunas de sus más importantes filiales. En conjunto, la sociedad bandeó el conflicto con bastante éxito: como se verá a continuación, mantuvo sus mercados y su negocio. Sin embargo, si se analizan estos años desde una perspectiva comparada, la pérdida de ventajas comparativas frente a Saltos del Duero fue muy notable.

a. Hidroeléctrica Española: una empresa sin empresarios[27]

Desde agosto de 1936 el Consejo de Administración de Hidroeléctrica Española estuvo intervenido por las autoridades del Gobierno de la República en cumplimiento de la legislación promulgada a tal efecto. De los antiguos Consejeros sólo se mantuvo Alejandro González Heredia, de adscripción política republicana, que defendió los derechos de los accionistas durante todo el conflicto. Hasta el verano de 1937, también permanecieron en la empresa su Director Técnico, Manuel Querejeta, y su secretario general, Ángel Luis de la Herrán. Al nuevo Consejo se sumaron los tres representantes del gobierno prescritos por las nuevas leyes, así como un representante del personal técnico administrativo y otro del personal obrero. Se formó, además, un Comité de Control, integrado por trabajadores, cuyas funciones debían limitarse a la inspección de la actividad industrial y a la presentación de sugerencias al Consejo. De las dos tareas asignadas, el Comité de Hidroeléctrica Española se dedicó con especial afán a la segunda y, en realidad, se convirtió en una activa oficina puente entre los trabajadores y el Consejo, diseñada para hacer llegar todo tipo de peticiones y quejas.

La coexistencia de los propietarios, la intervención del gobierno central y el Comité obrero hizo del Consejo de Administración de Hidroeléctrica Española un órgano muy politizado y poco operativo, saturado por cuestiones escasamente relacionadas con la electricidad. Los enfrentamientos fueron la tónica general de sus reuniones, marcadas -sobre todo- por el carácter conflictivo de uno de los representantes del Gobierno, Gonzalo Gil Torres, que ocupó el cargo de Presidente de la empresa hasta noviembre de 1937 y que continuó después como Consejero Interventor y Consejero Delegado del Estado. Desde sus primeras intervenciones, Gil Torres asumió y desplegó una pléyade de competencias que el resto de los Consejeros consideraron excesivas. Tampoco su actitud rigorista le facilitó las relaciones con el resto de sus compañeros. No se debe olvidar que el Consejo de Administración estuvo, durante el curso de la guerra, formado por trabajadores que, a pesar de las diferencias políticas y de las tensiones, tendieron con más facilidad a una política de olvido y normalización de la vida laboral que a la aplicación de sanciones y expulsiones.

Este peculiar Consejo de Administración, sin profesionales de la gestión y con la supervivencia de la empresa como único plan estratégico, supo, sin embargo, protegerse de muchos de los desórdenes propios de la revolución social que llevaron a la ruina a muchas otras entidades industriales en la España de la República y supo también preservar su estructura jurídica de sociedad anónima. La clave de la diferencia radicó, por una parte, en la indudable buena voluntad de los trabajadores de Hidroeléctrica Española, que no cayeron en los desmanes protagonizados en otros lugares, y, por otra, en la menor regulación del gobierno central si se compara con la que facilitó las nacionalizaciones y los procesos de colectivización, especialmente en Cataluña.

Hidroeléctrica Española mantuvo durante la guerra una cierta normalidad en dos aspectos cruciales: su ritmo de producción y su mercado, que funcionó a pesar de las distorsiones. La práctica inexistencia de destrucciones en el capital físico de la Sociedad explica el mantenimiento de la producción en niveles no muy lejanos a los de 1935, como puede verse en el cuadro 2. Los daños materiales se restringieron a la Central de Castellón, volada poco antes de que las tropas de Franco tomaran la ciudad, y a la desaparición de bastantes líneas secundarias próximas a los frentes de guerra, especialmente en Madrid y Levante. Otro asunto diferente

fue el mantenimiento y mejora que requerían las instalaciones y que, a pesar de los planes trazados por Querejeta, encontraron una auténtica piedra de toque en la escasez de materiales y en las dificultades para importarlos.

Cuadro 2. La producción de Hidroeléctrica Española en la guerra civil

Año	Producción (en Kw h)	Diferencia de producción respecto al año anterior (en Kw h)	Diferencia de producción respecto a 1935 (en %)
1935	463.929.287	.	.
1936	399.337.011	- 64.592.276	-14, 0
1937	441.460.684	42.123.673	- 4,9
1938	551.204.268	109.743.584	19,0
1939	446.839.555	- 104.364.713	-3,7

Fuente: Memorias de la empresa, años 1936-1939.

El funcionamiento del mercado constituye un hecho más llamativo si se tiene en cuenta el grado de descomposición que alcanzó la España de la República. El convenio que habían firmado las empresas eléctricas en 1934 fue suspendido por razones obvias, y se paralizaron todos los planes de desarrollo del mercado que tenía previstos la empresa. Sin embargo, Hidroeléctrica Española siguió alentando durante la guerra los acuerdos de entendimiento entre empresas eléctricas que permitieran repartir clientes y evitar, en lo posible, el descenso de los precios. De este modo, en abril de 1937 el Consejo se felicitaba por el convenio que su filial, Electra de Levante, había establecido con sus competidoras, Electra del Cabriel y Electra del Pajazo, para normalizar las tarifas e impedir la competencia entre ellas. Del mismo modo, la empresa siguió empleando dureza con sus rivales cuando la situación lo precisaba. El Consejo no tuvo problema, por ello, en denegar la petición de compra de electricidad que presentaron Unión Eléctrica Madrileña y otras empresas del Levante.

Los dos problemas principales que obstaculizaron el funcionamiento del mercado durante la guerra fueron el fraude eléctrico y los impagados. Respecto al primer asunto, resulta imposible su cuantificación, aunque las Memorias y las Actas de la Sociedad lo identificaron como uno de los mayores inconvenientes para el desarrollo de la empresa y reconocieron que los empleados fueron los primeros en suprimir los contadores de sus casas. En cuanto a la segunda cuestión, el índice de morosidad se disparó, provocando un problema creciente de Tesorería. Existieron tres tipos básicos de deudores: las filiales de Hidroeléctrica Española, sus clientes industriales y los institucionales. Algunas de las primeras como Unión Eléctrica de Cartagena, Volta o la Sociedad Electra Valenciana causaron graves quebraderos de cabeza a la Sociedad matriz, no sólo por sus impagos, sino porque se perdió todo control sobre ellas. Con los clientes industriales hubo que negociar los contratos a la baja o admitir pagos a plazos. Respecto a los institucionales, algunos como el Ayuntamiento de Valencia resultaron especialmente resistentes a la hora de pagar sus facturas e incluso llegaron a amenazar con la municipalización del servicio eléctrico, a pesar de lo cual Hidroeléctrica Española no se arredró y continuó intentando hacer valer sus derechos.

El fraude y los impagados explican el descenso de los ingresos de la Sociedad que sólo fue proporcional al descenso de producción en el año 1936. La caída fue mucho más grave de lo que puede reflejarse en términos nominales si se considera la inflación galopante que se produjo en la guerra (Véase el cuadro 3).

Cuadro 3: Evolución de productos de explotación (ingresos por venta de energía)

Año	Ingresos nominales de explotación (en miles de Ptas. corrientes)	Diferencia de ingresos nominales respecto a 1935 (en %)	Ingresos reales de explotación (1) (en miles de Ptas. de 1935)	Diferencia de ingresos reales respecto a 1935 (en %)	Diferencia de producción respecto a 1935 (en %)
1935	32.095,0	.	32.095,0	.	.
1936	27.525,3	-14	27.038,6	-15,7	-14, 0
1937	27.280,7	-14,6	23.846,8	-25,7	- 4,9
1938	30.899,7	-3,7	24.543,1	-30,8	19,0
1939	28.002,1	-12,7	19.650,6	-38,8	-3,7

Nota (1): para los cálculos reales he deflactado utilizando el índice de precios al por mayor de Maluquer (1989),

cuadro 12.16. p. 521. Fuente: Memorias 1936-1939.

A pesar del regular funcionamiento que mantuvo la empresa y de la escasa destrucción de capital físico que hubo de afrontar, es evidente la pérdida de ventajas comparativas respecto a otras eléctricas y, en especial, a su principal rival hasta entonces, Saltos del Duero, cuya situación geográfica le convirtió en pieza central para el aprovisionamiento de las tropas del general Franco.

b. Saltos del Duero: la consolidación del mercado natural[\[28\]](#)

Al empezar la guerra civil se cortaron las comunicaciones entre Zamora y Bilbao y las autoridades militares ordenaron a Saltos del Duero que interrumpiera el suministro a la industria vizcaína. Esta situación duró menos de un año y, en junio de 1937, pudieron restablecerse las relaciones entre Zamora y Vizcaya, la dirección de la empresa recuperó su control y el Consejo de Administración comenzó a reunirse de nuevo en el mes de julio. La empresa fue gestionada por sus propietarios durante todo el conflicto aunque bajo la supervisión de las autoridades militares y en estrecho contacto con ellas. En este marco de relativa libertad y de posición dominante, por ser la principal suministradora del ejército nacional, la sociedad pudo dedicarse a la ampliación de su mercado.

Pocos meses después de la caída de Bilbao, Saltos del Duero creó por iniciativa de su presidente, Julio Arteche, un Servicio de Coordinación para obtener un control más efectivo de las Filiales. Comenzó así un proceso de expansión que no se detuvo hasta 1939. El mercado de Soria pasó a manos de Saltos del Duero tras comprar, a través de la Electra de Burgos, las distribuidoras sorianas y ganar el concurso de alumbrado público de la ciudad. La única competidora de Duero en Cáceres, la Empresa Eléctrica de Cáceres, abandonó el negocio eléctrico. En la Provincia de León, la Junta Técnica del Estado impuso a la Sociedad la construcción de la línea Esla-León para asegurar el abastecimiento eléctrico de la zona, hasta entonces vinculado a centrales ubicadas en suelo leal a la República. Una vez recuperadas estas centrales, Saltos del Duero negoció con los productores y distribuidores leoneses hasta hacerse con la práctica totalidad del negocio eléctrico: se compró la mitad del capital de la empresa Hidroeléctrica Legionense, se eliminó del mercado a la empresa Hullera Vasco Leonesa, se paró la central de la sociedad Fuerzas y Riegos del Canal del Esla después de tomarla bajo control, se fundó la empresa Electra Benaventana y se pactó con la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada el reparto del mercado leonés.

En Zamora, donde se había hecho sentir de forma permanente la tenaz oposición de una empresa llamada El Porvenir, Saltos del Duero amenazó con una guerra de precios que obligó a intervenir al Delegado de Orden Público. Su mediación permitió un acuerdo de reparto del mercado entre las dos sociedades en conflicto y El Porvenir se comprometió también a saldar su déficit energético futuro con electricidad suministrada por Duero.

El proceso de control del mercado de Saltos del Duero quedó prácticamente concluido al terminar la guerra civil y se cerró definitivamente en los siguientes años: el emblema de la resistencia, El Porvenir de Zamora, fue comprada en 1947.

La ampliación de mercado que se produjo en la guerra civil permitió que Saltos del Duero cumpliera con creces sus previsiones para la zona castellano-leonesa. La incorporación de Soria, León y Zamora incrementó notablemente el porcentaje de energía colocada en el mercado natural y proporcionó, además, cuantiosos beneficios por la participación en el capital de las empresas filiales. De hecho, casi todas ellas repartieron dividendos en los años inmediatos a la contienda. Saltos terminó la guerra con un mercado ampliado y saneado y con unas perspectivas de expansión notables.

En 1940 la energía de Saltos del Duero comenzó de nuevo a llegar a Madrid, en virtud del acuerdo firmado en 1934 entre esta empresa y el resto de las principales eléctricas, y paralizado cuatro años por la guerra. Por su compromiso como principal empresa productora de electricidad, Saltos del Duero comenzó pronto los estudios de construcción de su segundo salto para atender las necesidades de sus demandantes, principalmente otras empresas eléctricas. En 1943 el Ministerio de Obras Públicas aprobó la construcción del Salto de Villalcampo, de 41 metros de altura, ubicado once kilómetros aguas abajo del salto del Esla, y con una capacidad de producción de 350 millones de kwh. Para afrontar los gastos de las obras, la empresa hizo una ampliación de capital que fue íntegramente absorbida por antiguos accionistas.

Un año después de la aprobación de Villalcampo se produjo la fusión de Saltos del Duero con otra importante empresa eléctrica, Hidroeléctrica Ibérica, distribuidora hasta entonces de la energía de Saltos del Duero. Las ventajas de la unión eran poderosas. Existían razones puramente técnicas y económicas como la posibilidad de lograr economías de escala en las redes de distribución, mayor facilidad para construir grandes saltos y la conjugación de los sistemas hidroeléctricos de los ríos Cinca y Ebro, cuyas concesiones eran propiedad de la Ibérica, y Duero. La fusión permitiría, además, acabar con los problemas de competencia surgidos entre ambas sociedades y le evitaría a Saltos del Duero todas las inversiones que hubiera precisado al entrar en solitario en el negocio de la distribución.

A estas ventajas indudables se unió una razón de fuerza mayor inexistente antes de la guerra civil: la creación del Instituto Nacional de Industria y su irrupción en el mercado eléctrico. En 1944 la amenaza de intervención del Estado en el sector eléctrico era real y afectaba especialmente a Saltos del Duero, cuyas obras en Villalcampo resultarían objetivo preferente en caso de expropiación. Las restricciones energéticas provocadas por unos años continuados de fuerte sequía otorgaban al INI argumentos de peso a la hora de defender una posible nacionalización del sector eléctrico.

En estas circunstancias, el presidente de Hidroeléctrica Española, José María Oriol Urquijo, persona de gran prestigio en el sector eléctrico español y muy respetado también por el general Franco, visitó al Jefe del Estado con el propósito de averiguar sus planes para el sector. Oriol logró que Franco asegurara la continuidad de las empresas privadas y el respeto del INI a su propiedad a cambio de una colaboración que se concretó en el nacimiento de Unidad Eléctrica, S.A., (UNESA). UNESA agrupaba a las dieciocho empresas eléctricas más

importantes del país y Franco le otorgó la misión de coordinar las centrales eléctricas existentes, promoviendo el intercambio de energía para asegurar un reparto adecuado de la electricidad. Esta institución debía promover la interconexión de los sistemas regionales de las empresas hasta crear una auténtica red nacional que conectara todos los centros de producción y consumo.

La creación de UNESA resultó un arma indudable de fortalecimiento de las empresas privadas frente al INI como lo fue también, para Hidroeléctrica Ibérica y Saltos del Duero, su fusión, aprobada dos meses antes de que el Instituto Nacional de Industria creara su Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA. De la suma de las dos eléctricas privadas nació Unión Ibérica Duero, S.A., Iberduero, un auténtico gigante eléctrico para España. Es innegable que la guerra civil había reforzado la situación de Saltos del Duero que se dibujaba, y así sucedió, como una de las empresas eléctricas con mayores perspectivas de crecimiento de los siguientes años.

Conclusiones

Es difícil exagerar la importancia que tuvo en España, a pesar de su neutralidad, la movilización industrial y económica llevada a cabo en Europa durante la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra no sólo facilitó la ocasión de realizar los primeros estudios españoles sobre movilización. Hizo posible, además, la creación de un cuerpo de opinión en el seno del ejército favorable a la intervención del Estado en la industria y a la nacionalización de las actividades industriales.

Durante la guerra civil, las repercusiones de la movilización resultaron muy distintas en uno y otro bando. La intensidad de su influencia fue directamente proporcional al peso del ejército como organizador y rector de la actividad económica e industrial. En la España de la República, la pervivencia de instituciones de carácter civil y su progresivo debilitamiento explican la escasa incidencia de las teorías que, sobre movilización industrial, se habían desarrollado en la España de entreguerras. Por el contrario, el bando franquista puso en marcha una movilización industrial centralizada, que le permitió controlar los exiguos efectivos iniciales y gestionar eficazmente la incorporación de las regiones industriales a medida que el ejército avanzaba. Lo más interesante es que la experiencia movilizadora trascendió los años de conflicto.

En efecto, la idea de que el Estado debía hacerse cargo de las actividades industriales relacionadas con la guerra y ponerlas en marcha cristalizó en la creación del Instituto Nacional de Industria, en el año 1941. En este sentido, puede decirse que, al menos durante sus primeros años de vida, el INI tuvo todo el carácter de un organismo de movilización industrial: su misión era iniciar en España muchas de las actividades que, en caso de guerra, asegurarían la necesaria autarquía y la defensa del Estado. Aunque su ley fundacional reconocía el carácter subsidiario del INI respecto a la iniciativa privada y le encomendaba la tarea de actuar como hospital de empresas, ambas funciones quedaron en la práctica un tanto relegadas y tardaron tiempo en hacerse presentes. A mi entender, el carácter autárquico y castrense del INI durante sus primeros años tuvo mucho que ver con las personas que lo dirigieron: su primer presidente, Juan Antonio Suanzes era marino e ingeniero militar. De él había dependido la organización de la industria durante buena parte de la guerra civil española y ya entonces había manifestado su deseo de crear una industria de carácter estatal. Suanzes incorporó al INI, además, a muchos de los militares que habían trabajado en las Comisiones de Movilización Industrial.

La guerra civil y la movilización afectaron de forma muy diversa a las empresas privadas. En estas páginas se ha puesto de manifiesto a través de los ejemplos de Hidroeléctrica Española y Saltos del Duero. Mientras la primera tuvo que limitarse a sobrevivir en la España de la República, la segunda encontró en la guerra una oportunidad de ampliar mercados y consolidar posiciones. Paradójicamente, la creación del INI supuso una amenaza real para ambas sociedades y para otras muchas: el Estado adoptaba por vez primera en España el papel de gran empresario con el fin de crear una industria autárquica que asegurara la independencia del país y su defensa en caso de guerra. El marcado carácter militar con que nació el INI y su firmeza a la hora de defender que la economía debía estar al servicio de los fines políticos del nuevo Estado le provocaron numerosos enfrentamientos con las empresas privadas y determinaron su orientación industrial. Estas fueron quizá dos de las consecuencias más graves y de mayor calado que la movilización industrial dejó en España.

Bibliografía Citada:

- Ballester, A. (1993), *Juan Antonio Suanzes 1891-1977. La política industrial de la posguerra*, León. Lid.
- Bricall, J.M. (1985), "La economía española 1936-1939", en Tuñón de Lara, M. et al., *La guerra civil española. 50 años después*, Barcelona, pp. 361-415.
- Casa Canterac (1917), "Las enseñanzas de la guerra. La industria militar", en *Memorial de Artillería del Ejército*, serie 6ª, vol. I, pp. 451 y sgtes.
- Catalán, J. (2005), "La industria entre la guerra y la revolución, 1936-1999", Comunicación presentada a la Sesión A2 "La economía de la Guerra Civil, 1936-1939", del VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/a2_catalan.pdf
- Díaz Morlán, P. (2006) "Los saltos del Duero, 1918-1944", en Anes, G. *Un siglo de Luz. Historia empresarial de Iberdrola*, Madrid, El Viso, capítulo 6, pp.279-323.
- Díaz Morlán, P. y San Román, E. (2009), "Causas de la restricción eléctrica en el primer franquismo: una aportación desde la historia empresarial", en *Investigaciones de Historia Económica*, nº 13, invierno 2009.
- Malefakis, E. (1987), "La economía española y la guerra civil", en Nadal, J.; Carreras, A. y Sudriá, C. comp., *La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica*, Barcelona, pp. 150-163.
- Marvía y Mayer, J. (1917), "Ligero bosquejo de las industrias en España en su relación con las necesidades militares, en general, y en particular con las del material de ingenieros", en *Memorial de Ingenieros del Ejército*, vol XXXIV, p. 94 y sgtes.

Marwick, A. (1980), "Problems and Consequences of Organizing Society for Total War", en Dreiszigler, N.F. ed, *Mobilization for Total War. The Canadian, American and British Experience 1914-18, 1939-45*, Ontario.

Sánchez Asiaín (2003), "Larraz y la tormenta monetaria del 36", en *Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, nº XI, pp. 105-155.

San Román, E. (1994), "Las consecuencias pacíficas de la Gran Guerra: la movilización industrial", en *Hispania*, vol. LIV/2, nº 187, pp. 611-658.

___ (1999), *Ejército e industria: el nacimiento del INI*, Barcelona, Editorial Crítica.

___ (2006) "Hidroeléctrica Española: los difíciles años de la guerra civil", en Anes, G. *Un siglo de Luz. Historia empresarial de Iberdrola*, Madrid, El Viso, capítulo 7, pp. 325-346.

___ (2006a), *Cien años de Historia de Iberdrola. La Historia Económica*, Madrid, El Viso.

___ (2008), "Política industrial y proyectos de empresa pública en el bando franquista", en Comín F. *Economía y Economistas españoles en la Guerra Civil*, Madrid: Galaxia-Gutemba, Círculo de Lectores, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Schwartz, P. y González, M.J. (1978), *Una historia del Instituto Nacional de Industria*, Madrid.

Sudrià, C. (1988), *Història econòmica de la Catalunya contemporània S. XX. Vol. 4, Una societat plenament industrial*, Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

Tipton, F. B. y Aldrich, R. (1987), *An Economic and Social History of Europe, 1890-1939*, Hong Kong.

Trebilcock, C. (1975), "War and the Failure of Industrial Mobilisation: 1899 and 1914", en Winter, J.M. ed., *War and Economic Development*, Cambridge, pp. 139-164.

[1] Una primera versión de este trabajo se presentó como Comunicación al Congreso Internacional "The Spanish Civil War in the age of Total War" organizado por el Departamento de Historia de la Universidad de Munich, en Julio de 2006.

[2] Como explican Tipton y Aldrich, una generación completa de militares había defendido la tradición ofensiva del Ejército, y tanto las líneas estáticas como la estrategia defensiva se consideraban signos de incompetencia e incluso de cobardía. Tipton y Aldrich (1987) p. 136

[3] A pesar de que la Gran Guerra suele considerarse la primera confrontación moderna que implicó una movilización general de recursos, Trebilcock defiende que la guerra inglesa contra los Boers fue un precedente inequívoco: en ella se produjo la primera llamada de alarma sobre la incapacidad de la industria de armamento para atender el brusco incremento de la demanda militar. Se inició como una "escaramuza colonial" y se terminó considerando una gran guerra que forzó la reforma drástica del sistema de abastecimientos militares. Sin embargo, esta reforma resultó a todas luces insuficiente para las necesidades de la guerra de 1914. Trebilcock (1975), p. 140.

[4] Marwick señaló la existencia de unas etapas similares en los procesos de creciente intervención estatal para los casos inglés y americano: a la emergencia inicial siguió un periodo de indecisión e improvisación y por último una etapa de decidida intervención. Creo que también se pueden aplicar al resto de los países implicados en la guerra, ya que tras el desconcierto inicial se dio en todos un gradual incremento de la intervención del Estado y de la creación de instituciones *ad hoc*. Marwick (1980), p. 13.

[5] "Estar preparados: he aquí unas palabras cuyo significado moderno difícilmente comprenderían los que en otros tiempos preparaban y dirigían la guerra". Marvá y Mayer (1917), p. 6.

[6] Sobre los trabajos de movilización industrial en España véase San Román (1994) y (1999), pp. 89-142.

[7] Puede verse como ejemplo Casa-Canterac (1917), p. 454.

[8] En este grupo cabe destacar la presencia de Manuel Pérez Urruti, José Marvá y Mayer y César Serrano. César Serrano fue responsable de la comisión de movilización industrial de la 1ª Región desde 1922 hasta 1929. Manuel Pérez Urruti trabajó en la misma comisión durante los años 1920-1924 y 1929-1931; en el periodo 1924-26 estuvo destinado en la Sección de Movilización de Industrias Civiles del Ministerio de la Guerra. El general de división José Marvá y Mayer, pasó los años del conflicto en la sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército; fue, sin duda, una de las figuras más preparadas y singulares del Ejército español de principio de siglo. Archivo General Militar de Segovia. Expedientes S-2531, P-1712, M-513.

[9] Es decir, como la cantidad de bienes o servicios a la que debe renunciarse para la obtención de otro determinado bien o servicio.

[10] Véanse a modo de ejemplo los trabajos de Sudrià (1988), Bricall (1985), Sánchez Asiaín (2003), Malefakis (1987).

[11] Catalán (2005), p. 86.

[12] Sánchez Asiaín (2003), p. 120.

[13] Sobre este tema puede verse con más detalle San Román (2008).

[14] Bricall (1985), pp. 374-375

[15] Decreto de 14-8-1936

[16] Orden de 29-8-1936, BOE 4-9-1936.

[17] Ley 1-10-1936, BOE 2-10-1936, nº 1.

[18] Decreto 21-6-1937, BOE 22-6-1937, nº 301

[19] Sobre la figura de Suanzes véase Schwartz y González (1978), Ballesteros (1993) y San Román (1999), p. 27.

[20] Decreto 3-5-1938, BOE 6-5-1938, nº 448.

[21] Decreto 3-5-1938, BOE 6-5-1938, nº 452. El 13 de Junio se constituyeron tres Comisiones que abarcaban la totalidad del territorio en manos del bando franquista. Las tres fijaron su sede en Bilbao donde también se encontraba la sede del Ministerio. Véase O. 13-6-1938, BOE 16-6-1938, nº 651.

[22] Decreto 3-5-1938, BOE 6-5-1938, nº 452.

[23] Ley 16-7-1938, BOE 18-6-1938, nº 777.

[24] Decreto 20-08-1938, BOE 22-8-1938, nº 53.

[25] Véase Díaz Morlán y San Román (2009)

[26] El río Júcar atraviesa las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia.

[27] Sobre la situación de Hidroeléctrica Española durante la guerra civil véase San Román (2006 y 2006a).

[28] Sobre la situación de Saltos del Duero durante la guerra civil véase Díaz Morlán (2006).

Resumen:

El artículo estudia la organización industrial durante la guerra civil en España y la influencia que, sobre este proceso, tuvieron los trabajos de movilización económica e industrial desarrollados a raíz de la Primera Guerra Mundial. En el primer apartado se repasa lo que supuso la movilización de 1914. El segundo apartado estudia la organización industrial tanto en la España republicana como en la España de Franco. Servirá para poner de manifiesto la distinta intensidad con que se siguieron, en uno y otro bando, las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial y las repercusiones que tuvo la movilización sobre el desarrollo industrial del estado franquista una vez terminado el conflicto. El tercer apartado recoge la experiencia concreta de dos empresas del sector eléctrico: la distinta manera de llevar a cabo la movilización tuvo consecuencias también diversas que fueron más allá de la propia guerra.

Palabras clave:

Historia Industrial, Movilización industrial, Organización industrial, Guerra civil española.

[Volver](#)

Abstract:

This paper studies the industrial management during the Spanish Civil War. The work developed by Spanish Army as a result of Great War had a deep impact on the eve of Civil War. First section looks at the mobilisation in 1914. Second section studies the industrial management in both, Republican and Franco's Spain. It points out the different way to learn war lessons and the economic consequences of mobilisation on industrial development after the war. Third section is focused on two specific electric companies: the different way in which the mobilisation took place also had consequences that went further the war.

Keywords:

Industrial History, Industrial Mobilization, Industrial Management, Spanish Civil War.

[Volver](#)

Imprimir